

Diciembre 13 de 1954

46ª REUNION — 5ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE, vicepresidente de la Nación,

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

ALBARINO, Ramón A.
AMADO, Elias Teodoro F.
ANGULO, Rodolfo Antonio
ANTINUCCI, Atilio
BAZAN, Miguel Angel
BRISOLI, Blas
CALVINO DE GÓMEZ, María Rosa
CASCO DE AGUER, Maria del Carmen
CASTANEIRA DE BACCARO, Hilda Nélida
CORREA, Antonio Eduardo
CORRECHÉ, Susana
DE PAOLIS, José Guillermo
DI GIROLAMO, Elena
DURAND, Alberto
FERRARI, Juan Antonio
GIMÉNEZ, Francisco
GRAZIANO, Alberto A.
HERRERA, Paulino B.
IBARGUREN, Prudencio M.
ITURBE, Alberto J.
JUAREZ, Carlos A.
NAVARRO, Ramón M.
PIERANGELI VERA, Humberto
FINEDA DE MOLINS, Ilda Leonor
RIERA, Fernando
RUIZ VILLASUSO, Eduardo Pío
VELAZCO, J. Filomene
XAMENA, Carlos
ZAVALA ORTIZ, Ricardo

AUSENTE, EN MISIÓN ESPECIAL:

LARRAURI, Juana

AUSENTE, CON LICENCIA:

LUCO, Francisco R.

AUSENTE, CON AVISO:

RODRIGUEZ LEONARDI DE ROSALES, Elvira E.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo:

Comunica la promulgación de una ley.
(Página 1102.)

II.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 1102.)

III.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado. (Página 1102.)

IV.—Despacho de comisión. (Página 1102.)

V.—Peticiones particulares. (Página 1102.)

2.—A moción del senador De Paolis se fija el asunto a considerar en la sesión. (Página 1102.)

3.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos en el proyecto de ley, venido en revisión, por el que se reforma el régimen tributario nacional. Se aprueba. (Página 1102.)

4.—Asunto entrado:

VI.—Comunicación oficial. (Página 1117.)

5.—Apéndice:

I.—Sanción del Honorable Senado. (Página 1118.)

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo. (Página 1118.)

—En Buenos Aires, a trece días del mes de diciembre de 1954, a la hora 10 y 15, dice el

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I**Mensaje del Poder Ejecutivo**

Comunica la promulgación de una ley

Sr. Secretario (Reales). — El Poder Ejecutivo envía mensaje comunicando la promulgación de la ley 14.390, por la que se unifican los impuestos internos nacionales.

Sr. Presidente. — A sus antecedentes

II**Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados**

Sr. Secretario (Reales). — La Honorable Cámara de Diputados comunica la sanción definitiva del proyecto de ley sobre reformas a la legislación aduanera y del proyecto de ley sobre colonización.

Sr. Presidente. — A sus antecedentes

III**Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado**

Sr. Secretario (Reales). — La Presidencia informa que con fecha 10 del corriente ha comunicado al Poder Ejecutivo la sanción definitiva del proyecto de ley sobre legislación aduanera, y con fecha 13, la sanción definitiva del proyecto de ley sobre colonización (1).

IV**Despacho de comisión**

Sr. Secretario (Reales). — La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos ha producido despacho en el proyecto de ley, venido en revisión, por el que se introducen reformas al régimen tributario nacional.

Este despacho ha pasado directamente al orden del día de acuerdo con el artículo 90 del reglamento del Honorable Senado.

V**Peticiones particulares**

Sr. Secretario (Reales). — Los colegios de escribanos de las provincias de Santa Fe, Salta, Entre Ríos y Catamarca envían telegramas re-

lacionados con el proyecto de ley, venido en revisión, sobre reformas al régimen tributario nacional.

Sr. Presidente. — A sus antecedentes.

2**MOCION FIJANDO EL ASUNTO A CONSIDERAR EN LA SESION**

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Hago moción para que en la sesión de la fecha se considere el orden del día número 99, que contiene el despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos en el proyecto de ley, venido en revisión, sobre reformas al régimen tributario nacional.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Mendoza.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Así se procederá.

3**REFORMAS AL REGIMEN TRIBUTARIO NACIONAL**

(Orden del día número 99)

Sr. Secretario (Reales). — (*Leyendo*):

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, por el que se reforman impuestos del régimen tributario; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90 del reglamento, el presente despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 10 de diciembre de 1954.

Alberto Durand. — Elvira E. Rodríguez Leonardi de Rosales. — Susana Correché. — Blas Brisoli. — Miguel Angel Bazán. — Francisco Giménez. — Eduardo P. Ruiz Villaso. — Fernando Riera.

(1) Véase el texto de las notas en el Apéndice.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(Diciembre 7 de 1954)

PROYECTO DE LEY*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

—El texto del proyecto de ley es el mismo que se publica en la página 1070.

ANTECEDENTE**Mensaje del Poder Ejecutivo**

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1954.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley, mediante el cual se reforma el régimen tributario nacional.

Como podrá verse, las disposiciones proyectadas tienden al cumplimiento de los objetivos generales y especiales establecidos en materia de política impositiva por el segundo Plan Quinquenal (capítulo XXII), utilizando la función del impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la justicia y de la economía social del país.

La iniciativa constituye pues, como no escapará a la apreciación de vuestra honorabilidad, una etapa más en la adecuación de nuestro régimen rentístico a la orientación justicialista dada al país en el orden económico-financiero a partir del año 1946, proceso que ha demandado más de una vez la atención de ese honorable cuerpo en los últimos años, debido tanto a iniciativas propias como a emanadas de este Poder Ejecutivo.

El proyecto que se acompaña configura un vasto plan de reformas impositivas, de trascendente contenido social. Se funda en el sano principio de obtener una equitativa redistribución de la carga fiscal en relación con la capacidad contributiva de la población. En tal sentido, procura alcanzar una incidencia equilibrada de los tributos, a cuyo efecto, sin perjuicio de ampliar con carácter general el ámbito no imponible, desgrava en mayor proporción los réditos del trabajo personal y los consumos indispensables, lo que ha de permitir aliviar notablemente la presión tributaria que recae sobre los sectores más modestos de la población.

Las reformas proyectadas logran estos propósitos sin perturbar el proceso de capitalización económica del país, pues esas desgravaciones no son compensadas con aumentos equivalentes en otros sectores del sistema impositivo, todo lo cual está llamado, sin duda, a estimular el desarrollo de las actividades económicas, sobre las que descansan, en definitiva, el bienestar de la colectividad y el engrandecimiento de la Nación.

Desde luego, esta política no puede llevarse a cabo sin una acción decidida de contención y parsimonia de las expensas presupuestarias, pues no debe perderse de vista que el alcance de toda reforma impositiva se halla subordinado a la magnitud de las erogaciones exigidas por la atención de los servicios a cargo del Estado. Con ello va dicho que este plan

de reformas impositivas se vincula estrechamente con el propósito, reiteradamente expuesto por el Poder Ejecutivo, de restringir al máximo los gastos públicos de la Nación.

El proyecto, cuyas principales disposiciones se analizan seguidamente en particular, contempla, además, la finalidad de perfeccionar nuestro régimen fiscal, adecuándolo a la evolución de los principios que rigen la técnica financiera.

I. — Ley de procedimientos

La ley 11.683 (texto ordenado en 1952), que regula los procedimientos para la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes a cargo de la Dirección General Impositiva, se modifica mediante el artículo 1º del proyecto en dos aspectos principales: recargos por mora y prescripción de la acción de repetición.

Es un principio incuestionable que la obligación tributaria no se cumple sólo con la aportación al erario público de las correspondientes prestaciones pecuniarias, sino que éstas han de realizarse dentro de los plazos fijados, a fin de asegurar el desenvolvimiento normal de las finanzas del Estado. Pagar puntualmente es, pues, un deber ineludible y el contribuyente que no lo hace así, sin una razón atendible, debe ser sancionado con severidad.

La ley que se comenta consagra dos grandes franquicias: el beneficio de la presentación espontánea, que libera de toda penalidad a quienes se acogen al mismo, y la concesión de facilidades de pago por razones justificadas. Consecuentemente, no existe razón valadera para incurrir en infracciones que motivan la aplicación de recargos.

Sin embargo, en la práctica, dichas infracciones son frecuentes y no cabe atribuirles otro origen que la lenidad de los recargos vigentes. En efecto, en la actualidad, conforme al artículo 42 de la ley, el máximo del recargo, cualquiera sea el lapso de mora, alcanza sólo al 20 %, circunstancia que los contribuyentes remisos aprovechan para diferir indefinidamente el pago de sus obligaciones impositivas, alentados inclusive por la posibilidad de liberarse totalmente de las mismas si prescribiera la acción del fisco para exigir su cumplimiento.

Para evitar situaciones como las descritas y con el objeto de que el régimen organizado por la ley cumpla su doble finalidad, intimidatoria y resarcitoria, en su caso, se aumentan los recargos progresivamente: partiendo del 20 % actual que rige para retardos superiores a tres meses, hasta llegar al 100 por ciento, cuando la mora exceda de 5 años.

En cuanto a la acción de repetición de impuestos, cuyo término de prescripción es de 2 ó 5 años, según las normas actuales y la naturaleza de los pagos, el proyecto establece un término uniforme de 5 años para todos los casos.

A este respecto, cabe señalar que la existencia de dos plazos distintos, aparte de promover dudas y discusiones acerca de cuál de ellos corresponde aplicar en los casos concretos, puede dar lugar a situaciones de inequidad cuando se trata de reajustar declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. En efecto, ocurre con frecuencia que en algunos períodos fiscales se determinan saldos a favor del contribuyente y en otros, a favor del fisco. Como la prescripción

para este último es siempre de 5 años y para aquél sólo de 2 en determinados supuestos, resulta que el contribuyente se ve obligado a ingresar todas las diferencias en su contra, y no puede, en cambio, solicitar la acreditación o devolución de algunas que le son favorables.

Con la uniformidad de ambos términos se corrige la anomalía señalada y se obtiene una adecuada solución del problema.

Las restantes modificaciones que se introducen en la ley 11.683 por el artículo 1º, tienden a perfeccionar la técnica de aplicación de los gravámenes y actualizar los procedimientos administrativos y judiciales en orden al cumplimiento de los objetivos XXII, G. 7 y E. 17 del segundo Plan Quinquenal.

II. — Impuesto a los réditos

Por el artículo 2º del proyecto se modifican varios aspectos de la ley de impuesto a los réditos. Merecen especial mención, el aumento de las sumas deducibles en concepto de mínimo no imponible, cargas de familia y adicional por rentas de cuarta categoría; la reestructuración de la escala adicional del gravamen, el aumento de las amortizaciones extraordinarias; la unificación del impuesto a las sociedades de capital; la exención total a los intereses de depósitos en caja de ahorro y el tratamiento de las actividades ejercidas por corredores, viajeros de comercio y despachantes de aduana.

Concordante con la política reiteradamente expuesta y seguida por el Poder Ejecutivo, en el sentido de favorecer a las clases económicamente menos dotadas, se proyectan dos medidas de singular importancia que se complementan entre sí y que concurrirán armónicamente al mejor logro de los objetivos G. 1 (Distribución de la carga fiscal), G. 4 (objetivos sociales de la política impositiva), E. 11 (Integración del núcleo familiar) y E. 13 (Trabajo personal) del capítulo XXII del segundo Plan Quinquenal. Se trata del aumento de las deducciones en concepto de mínimo no imponible, cargas de familia y adicional por rentas de cuarta categoría, por una parte, y por la otra, de la reestructuración de la escala de la tasa adicional progresiva que actualmente grava los réditos superiores a \$ 5.000 anuales.

Los mínimos no imponibles vigentes —\$ 3.600 anuales para las categorías primera y segunda y \$ 6.000 para las categorías tercera y cuarta— se elevan y uniforman en la cantidad de \$ 7.200 anuales. La uniformación tiene su razón de ser en la circunstancia de que, tratándose de un mínimo no imponible, es decir, de una desgravación que tiende a evitar que el impuesto incida sobre las sumas que se consideran indispensables para sufragar las necesidades primordiales, resulta justo y equitativo que gocen del mismo beneficio todos los contribuyentes, cualesquiera fueren las fuentes de sus réditos.

En cuanto a cargas de familia, los aumentos son los siguientes: adicional por ese concepto, de \$ 1.500 a \$ 2.400; por cónyuge, de \$ 1.500 a \$ 2.400; por hijos y otras cargas, de \$ 1.200 a \$ 1.800. Finalmente, la deducción adicional para los contribuyentes que obtengan réditos del trabajo personal, se eleva de pesos 12.600 a \$ 15.000 anuales.

El acrecentamiento del monto de las deducciones por los conceptos que se acaban de indicar, se tradu-

cirá en las siguientes cifras para los contribuyentes con «familia-tipo» (casados y con dos personas a su cargo):

Categorías	Deducción actual m\$.n.	Deducción proyectada m\$.n.	Diferencia m\$.n.
Primera y segunda ..	9.000	15.600	6.600
Tercera	11.400	15.600	4.200
Cuarta	24.000	30.600	6.600

Es interesante advertir que las nuevas desgravaciones resultantes de las modificaciones proyectadas, traerán como consecuencia la eliminación de una apreciable cantidad de contribuyentes directos y disminuirán además las tareas a cargo de los agentes de retención —muchos de los cuales quedarán totalmente liberados de ellas— toda vez que un gran número de personas en relación de dependencia dejarán de ser contribuyentes (un empleado casado, con dos hijos, tendrá \$ 2.350 mensuales aproximadamente, exentos del impuesto a los réditos). Por otra parte, la eliminación de una estimable cantidad de contribuyentes marginales, permitirá a la Dirección General Impositiva efectuar un más amplio y efectivo contralor sobre los demás responsables del gravamen.

Como no escapará al elevado criterio de vuestra honorabilidad, las modificaciones enumeradas importarán una merma considerable en la recaudación del impuesto a los réditos; no obstante, este Poder Ejecutivo no vacila en afrontar el significativo sacrificio que ello implicará para el erario, en favor de la consecución de los propósitos de política social que orientan la acción del gobierno.

Como se ha expresado más arriba, el aumento de las deducciones en concepto de mínimo no imponible, cargas de familia y adicional para rentas de trabajo personal, se complementa en el proyecto con una reestructuración de la escala progresiva de la tasa adicional del impuesto, con el objeto de redistribuir su carga en forma tal de aliviar a las rentas pequeñas y medianas, iniciando su aplicación a partir de los réditos netos imponibles que exceden de \$ 10.000 anuales en lugar del límite vigente que es de \$ 5.000, y sin que por ello se eleve el máximo actual, que se mantiene en el 33 por ciento.

Corresponde hacer notar que esta reestructuración significará un menor desembolso por impuesto a los réditos para todos los contribuyentes con rentas netas imponibles de hasta \$ 80.000 anuales, y que su gravitación sobre los que tengan rentas superiores a dicha cifra será sumamente leve, toda vez que en conjunto la tasa promedio del gravamen no experimenta variación.

Por último, cabe poner de relieve que la conjunción de ambas medidas se traducirá en el pago de sumas menores que las actuales para todos los contribuyentes de la «familia-tipo» (casados y con dos personas a su cargo), con réditos netos de hasta \$ 150.000 anuales.

Por la ley 14.060 vuestra honorabilidad facultó al Poder Ejecutivo para admitir en el balance impositivo del impuesto a los réditos amortizaciones extraordinarias sobre rubros del activo fijo, con el propósito de ajustar dicho balance a la realidad económica, tratando de que expresara beneficios reales y no valores teóricos.

En uso de dicha facultad se dictó el decreto 5.802/52, que estableció los coeficientes de aplicación sobre las amortizaciones ordinarias para calcular las

extraordinarias, en función de los ejercicios en que los bienes fueron adquiridos. Por el mismo decreto se dispuso que las amortizaciones extraordinarias no tendrían incidencia alguna para el cálculo del capital y de la utilidad gravada con el impuesto a los beneficios extraordinarios.

Las mismas razones que motivaron la implantación del sistema de amortizaciones extraordinarias mueven al Poder Ejecutivo a reverlo en los siguientes aspectos: monto de los coeficientes admitidos, ejercicios de adquisición de los bienes y aplicación para el impuesto a los beneficios extraordinarios.

En cuanto a la magnitud de los coeficientes de amortización extraordinaria se considera prudente aumentarlos en un 75 % aproximadamente, con respecto a los fijados por el citado decreto. En lo que concierne a las adquisiciones susceptibles de beneficiarse con dichas amortizaciones, se estima necesario incluir las efectuadas en los ejercicios 1951, 1952 y 1953, determinando para el primero un coeficiente del 40 % y para los dos últimos uno del 10 por ciento.

Por otra parte, y atendiendo a la íntima vinculación existente entre los impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios, a tal punto que para establecer la utilidad imponible a los efectos de liquidar el gravamen nombrado en segundo término se parte de la que arroja el balance impositivo practicado para el primero, se conceptúa, y así se proyecta, que corresponde admitir la deducción de las amortizaciones extraordinarias también en el impuesto a los beneficios extraordinarios.

Este procedimiento, al mismo tiempo que significará una apreciable mejora en la técnica de aplicación de los tributos, permitirá simplificar la liquidación del impuesto a los beneficios extraordinarios, ya que el cómputo en éste de las amortizaciones extraordinarias reemplazará la actual deducción de un importe adicional equivalente al monto de las amortizaciones ordinarias, tal como se explica más adelante.

Otra de las modificaciones comprendidas en el artículo 2º del proyecto es la relativa a la unificación del impuesto en materia de sociedades de capital.

Conforme al régimen en vigor, las sociedades anónimas constituidas en el país pagan el 24 % sobre la utilidad impositiva del ejercicio y retienen, además, el 6 % sobre los dividendos en la oportunidad en que proceden a su distribución. Por su parte, las sociedades de capital constituidas en el extranjero abonan el 30 % sobre su utilidad imponible, si tienen un establecimiento permanente en el país, y la misma tasa del 30 % por vía de retención en el momento de acreditárseles o girárseles los réditos obtenidos en la República.

El sistema que rige actualmente para las empresas del país resulta innecesariamente complicado, tanto para los contribuyentes como para la administración fiscal, al mismo tiempo que constituye un desigual tratamiento basado exclusivamente en la forma jurídica adoptada para su organización por la entidad. En efecto, de acuerdo con la ley, en el caso de únicos dueños o sociedades de personas, se gravan los beneficios con la totalidad del impuesto en el ejercicio en que se obtiene; en cambio, en el de sociedades de capital, parte del impuesto se ingresa cuando se obtiene la utilidad (24 %) y parte (6 %) cuando

A corregir esta anomalía tiende la reforma que en este aspecto se propone, la cual, como surge de lo expuesto, servirá para racionalizar en la materia la aplicación del tributo (objetivo XXII, G. 7 del segundo Plan Quinquenal).

Constituye una preocupación constante de este Poder Ejecutivo, compartida por vuestra honorabilidad, la de estimular y fomentar por todos los medios posibles al ahorro popular. Esta preocupación, reflejada en el objetivo XXII, E. 9, del segundo Plan Quinquenal, que prevé exenciones y reducciones impositivas adecuadas a fin de promover la difusión del ahorro en todo el país, se concreta en el orden tributario mediante la desgravación total a los intereses de los depósitos en caja de ahorro, cualquiera sea la modalidad adoptada para su liquidación y pago.

Al respecto, corresponde destacar que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, sólo están exentos del impuesto a los réditos los intereses que no excedan en conjunto de \$ 50 por año fiscal y por persona, en tanto que la exención proyectada, además de proceder cualquiera sea el importe de aquéllos, alcanza, asimismo, a los que se liquidan y pagan bajo modalidades especiales, como es el caso de los intereses acreditados en las cuentas de participación en valores mobiliarios, recientemente implantadas por el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias con el objeto de canalizar el ahorro popular hacia las fuentes de la economía nacional.

Correlativamente y para contribuir al incremento de los sistemas de ahorro a través de los planes de capitalización y seguro, se exige también del gravamen a las diferencias entre las cuotas o primas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los casos de bonos de capitalización y en los de seguros de vida y mixtos.

De acuerdo con las normas de la ley 11.682 (texto ordenado en 1952) los réditos derivados del ejercicio de actividades de corredor, viajeros de comercio y despachantes de aduana, se hallan incluidos en la tercera categoría (artículo 49) y, por consiguiente, no gozan de la deducción adicional que la misma ley acuerda para las rentas de cuarta categoría.

Sin embargo, no puede desconocerse que en la generación de los réditos provenientes de las actividades enunciadas, interviene únicamente o en forma netamente preponderante el trabajo personal, razón ésta que justifica la inclusión de los réditos de que se trata dentro de la cuarta categoría, como se proyecta.

III.— Impuesto a los beneficios extraordinarios

Entre las reformas que se introducen a la ley del impuesto a los beneficios extraordinarios (artículo 4º del proyecto), se encuentra en primer término la extensión a este gravamen de las amortizaciones extraordinarias permitidas para el cálculo del impuesto a los réditos, vale decir, la supresión de la deducción de un importe equivalente a las amortizaciones ordinarias correspondientes a inversiones de activo fijo efectuadas con posterioridad al 1º de enero de 1940. En esta forma, se tendrá una sola deducción por el mismo concepto para ambos rubros, con las consiguientes ventajas técnicas y prácticas.

Corresponde señalar que aparte de tales ventajas, el nuevo sistema permitirá corregir la inequidad del tratamiento vigente que, al no tomar en cuenta la época de las adquisiciones, beneficia, en términos

generales, en mayor medida a las empresas nuevas con relación a las de más antigua data.

Sin embargo, atento a que la aplicación del régimen propuesto podría, en algunos casos, determinar una menor deducción por el concepto considerado, se ha creído justo complementarlo con la adecuación del mínimo no imponible vigente para este impuesto, elevándolo de \$ 20.000 a \$ 30.000.

En cuanto a las demás modificaciones contempladas en el mencionado artículo, tienen por objeto uniformar los regímenes de los gravámenes que recaen sobre utilidades, implantando para beneficios extraordinarios el sistema que rige para réditos y ganancias eventuales en lo relativo al período (4 años) dentro del cual pueden compensarse quebrantos de ejercicios anteriores; y hacer más flexibles las disposiciones que reglan la deducción de sueldos de dueños o socios de sociedades de personas y del porcentaje en compensación del impuesto a los réditos, facultando al Poder Ejecutivo a fijar unos y otros por decreto, atendiendo a las fluctuaciones financiero-económicas y a las variaciones que se operen en la tasa promedio del impuesto a los réditos, respectivamente.

IV. — Impuesto a las ganancias eventuales

El artículo 5º del proyecto trata del impuesto a las ganancias eventuales, cuyas modificaciones, substanciales en varios aspectos, se traducirán en un ponderable alivio para los contribuyentes que obtengan beneficios sujetos a dicho gravamen.

En primer término, cabe subrayar la deducción adicional que se proyecta para los casos de ventas de inmuebles y automotores. Conforme a la misma, el costo de los bienes transferidos se incrementará en un 5 % por cada año transcurrido desde su adquisición hasta 1945, y en un 10 %, desde 1946 hasta 1953 inclusive.

Esta desgravación, enderezada a compensar el alza experimentada por los valores de los bienes en general, y en particular de los inmuebles, permitirá una apreciable actualización de los costos computables a los efectos impositivos y redundará en una significativa disminución del impuesto a pagar en el momento de la transferencia.

Corresponde también poner de manifiesto la reforma que se proyecta para el caso de transferencia de bienes adquiridos por herencia, legado o donación. Actualmente, se considera valor de costo, a los fines fiscales, el que tuvo el bien en manos del causante, cualquiera fuere la época en la cual fué comprado o construido. Al propiciar que en lugar de computar dicho valor se tome el fijado para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se persiguen dos propósitos. Por una parte, la actualización del valor a considerar para establecer el gravamen, con la consiguiente reducción en el impuesto a pagar; y por la otra, la uniformación de los valores que sirven de base para la imposición con los que en la misma materia rigen para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y para el impuesto a los réditos.

Las medidas que se acaban de esbozar tendrán una acentuada repercusión en los ingresos fiscales, toda vez que originarán una sensible reducción en la recaudación del impuesto a las ganancias eventuales. No obstante, este Poder Ejecutivo está seguro de que vuestra honorabilidad compartirá la conveniencia de su implantación en orden al cumplimiento

de los objetivos sociales y económicos que este gobierno se ha trazado.

Pero, así como los poderes públicos se hallan decididos a afrontar el sacrificio que tales medidas importarán para el erario, también lo están para adoptar todas las providencias conducentes a evitar mermas que provienen de maniobras realizadas para evadir el pago en su justa medida del impuesto de que se trata.

Lamentablemente, la experiencia ha evidenciado, y ello es público y notorio, que frecuentemente los vendedores, sujetos del gravamen, en connivencia con los compradores, con los intermediarios y aun con los profesionales que intervienen en las operaciones de compraventa de inmuebles y otros bienes alcanzados por la ley, simulan precios de transferencia inferiores a los reales para evadir en todo o en parte el pago del tributo.

Impedir la consumación de maniobras de esta naturaleza, que constituyen evidentes fraudes, es el fin que persigue el párrafo que se propone agregar al artículo 6º de la ley, según el cual la Dirección General Impositiva podrá impugnar y ajustar a los valores corrientes en plaza los precios de venta convenidos entre las partes cuando sean notoriamente inferiores a aquéllos, como asimismo considerar a todos los intervinientes personal y solidariamente responsables por el impuesto omitido y hacerles pasibles de las multas previstas para los defraudadores fiscales.

El Poder Ejecutivo confía en que no deberá recurrirse a la aplicación de tales sanciones, máxime si se tiene presente que el espíritu de justicia y liberalidad que informa a las modificaciones proyectadas, impone a los contribuyentes el deber moral de corresponder a las mismas satisfaciendo el gravamen que legalmente corresponda; pero está firmemente dispuesto a reprimir con todo el rigor que emana de la nueva norma las aludidas maniobras, toda vez que éstas no sólo perjudican las arcas fiscales, sino a los propios contribuyentes, ya que los recursos que se dejan de percibir a raíz de las evasiones impositivas deben ser suplidos con el aumento de los gravámenes vigentes o la creación de otros nuevos para satisfacer las necesidades financieras del Estado.

Para terminar con el comentario relativo al artículo 5º del proyecto adjunto, resta referirse a la norma que se propone para establecer un tratamiento impositivo especial para las primas de emisión de acciones, a partir del 1º de enero de 1955. Conforme a su acepción técnica, contable y jurídica, la prima de emisión constituye el sobreprecio que se exige sobre el valor nominal de los papeles que emite una sociedad o, en otras palabras, es la diferencia entre el precio de colocación o subscripción de la acción y su valor nominal.

De acuerdo con este concepto clásico de la prima y atento a que en la ley no existe disposición alguna que la contemple en forma especial o que le asigne un valor distinto al que resulta de aplicar aquel criterio, como ocurre en otros casos (por ejemplo, valuación fiscal en lugar de valor real, cuando se trata de inmuebles), hasta la fecha no ha quedado otro arbitrio que gravar con el impuesto la totalidad de la prima, esto es, la diferencia entre el precio de subscripción y el valor nominal de la acción.

Este temperamento de incuestionable validez ha dado lugar a que, con el objeto de evitar la carga del tributo, se opte en la práctica por emitir a la

par acciones que fácilmente podrían colocarse con primas de consideración. Esta modalidad significa un perjuicio para las entidades emisoras que en esta forma dejan de incorporar a su actividad económica las sumas que habrían importado las primas de emisión.

Por las razones expuestas y con el fin de coadyuvar, en el orden impositivo, a la consolidación de la economía de las empresas organizadas bajo la forma de sociedades de capital, se propicia la sanción de la norma específica aludida, según la cual sólo estará sujeta al impuesto a las ganancias eventuales la diferencia entre el valor de colocación de la acción y su valor efectivo, calculado en relación con el capital de la entidad ajustado de acuerdo con las normas que rigen el impuesto a los beneficios extraordinarios.

V. — Impuesto a las ventas

Las modificaciones proyectadas al impuesto a las ventas —artículo 6º del proyecto— concretan varios de los objetivos señalados en el segundo Plan Quinquenal. Así, se exime del gravamen a los aceites comestibles, convirtiendo en definitiva la suspensión dispuesta por decreto 11.894/54 y se desgravan asimismo las ventas de miel de abejas (objetivo XXII, E. 14). Se exceptúa también a los bloques premoldeados de hormigón que en las construcciones modernas reemplazan con ventaja a los ladrillos, que ya gozan de la exención (objetivo XXII, E. 15). Se amplía la excepción vigente para la venta de libros de texto, a toda clase de libros y asimismo al papel destinado a su impresión (objetivo XXII, E. 16). Se convierte en desgravación definitiva la suspensión del impuesto a las ventas de los productos de explotaciones mineras dispuestas por decreto 9.959/52, en concordancia con la amplia liberación impositiva prevista en el proyecto de Código de Minería elevado oportunamente a consideración de vuestra honorabilidad, y con las demás iniciativas del gobierno destinadas al fondo de la industria minera (objetivo G. 5 del capítulo XXII).

VI. — Impuestos internos

Las reformas que por el artículo 7º del proyecto se introducen en el texto ordenado en 1952 de las leyes de impuestos internos, tienen por finalidad la de redistribuir equitativamente y manteniendo un adecuado equilibrio los gravámenes que recaen sobre el consumo, al mismo tiempo que perfeccionar la técnica de su aplicación y ajustar al máximo la fiscalización para evitar evasiones.

La reforma propuesta a los artículos 31 y 35, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar las alícuotas vigentes en materia de cigarrillos, cigarros y tabacos, persigue fundamentalmente posibilitar el ajuste de los precios de dichos productos para compensar los mayores costos de producción determinados por las mejoras de sueldos y salarios fijadas por los convenios recientemente suscritos, como, asimismo, dotar al régimen de la suficiente flexibilidad a fin de contemplar futuras necesidades de éste o parecido tipo.

En lo relativo a alcoholes, el cambio de sistema consiste básicamente en sujetar a la tasa de m\$N 0,115 por litro y por grado (equivalente a la tasa de m\$N 0,93 y sobretasa de m\$N 0,085 actuales) a todo alcohol que se utilice para el consumo de boca, quedando

gravados con impuestos de m\$N. 0,03 por litro y por grado, o totalmente exentos los alcoholes desnaturalizados, según fuere su destino.

El nuevo régimen contribuirá a impedir la elaboración clandestina de bebidas alcohólicas, evitará el desvío de los alcoholes puros de sus usos específicos, perfeccionará la percepción del gravamen concentrándola en la fuente de producción y facilitará su fiscalización adecuada, sin que por ello se aumente el costo del alcohol que las distintas industrias utilizan como materia prima para la fabricación de sus productos.

Corresponde señalar que la aparente elevación del estampillado de los vinos compuestos y similares, que de m\$N 0,25 por litro pasa a ser de m\$N 1,30, no constituye un aumento del gravamen que en la actualidad tributan, toda vez que el mayor estampillado está destinado a substituir la sobretasa de m\$N 0,085 que se satisface ahora por el alcohol contenido en el vino utilizado como materia prima.

Las reformas que se propician a los artículos 74 y 75 de la ley de impuestos internos, tienden a adecuar los respectivos textos a las disposiciones correlativas de la ley 12.988 y de la ley de sellos, respectivamente.

En materia de impuesto a los artículos suntuarios se circunscribe la aplicación del gravamen vigente a los objetos que en razón de los materiales empleados en su fabricación constituyen inversiones de lujo, es decir, a los que por ser costosos o superfluos, o ambas cosas a la vez, no satisfacen necesidades imprescindibles y, por consiguiente, pueden soportar con facilidad el tributo sin que éste grave como factor negativo sobre la economía general (objetivo XXII, G. 5 del segundo Plan Quinquenal). Precisamente, para evitar tal incidencia se exime en forma expresa de la imposición a aquellos objetos que no obstante confeccionarse con algunos de los materiales enumerados en el nuevo artículo 111, no tienen carácter suntuario.

Las normas que con respecto a bebidas alcohólicas contiene el artículo 7º del proyecto adjunto, se complementan con las establecidas en el artículo 8º en lo referente a hidromeles, cuyo fin es el de corregir una deficiencia de la actual ley que, al equiparar el aludido producto a una bebida alcohólica, lo sujeta a un gravamen proporcionalmente superior al que tributan los vinos y sidras, a los cuales se asemeja por sus características naturales y organolépticas.

VII. — Contribución inmobiliaria

Consecuente con los propósitos reiteradamente expuestos por este gobierno, en cumplimiento de los objetivos VIII, E. 7 y XXII, E. 15 del segundo Plan Quinquenal y, en concordancia con las medidas adoptadas en otras esferas de su competencia, con el objeto de fomentar la construcción de viviendas y de mitigar los efectos del alza del costo de las construcciones y de los valores inmobiliarios, el artículo 9º del proyecto contiene una serie de disposiciones que entrañan apreciables rebajas en materia de contribución inmobiliaria.

Conviene recordar aquí que por la ley 14.273 sancionada por vuestra honorabilidad el año próximo pasado, se autorizó a este Poder Ejecutivo para diferir la revaluación de los inmuebles que debía practicarse en 1953. Se fundaba esta medida en la necesidad de evitar los efectos que en la economía de los

propietarios iba a producir el aumento del impuesto que resultaría de la actualización de los valores fiscales en momentos en que los precios de las locaciones se hallaban congelados.

Esta prudente disposición se complementa ahora con la reforma del artículo 21 de la ley, en cuya virtud se rebaja en seis puntos la tasa de la contribución correspondiente a los inmuebles edificados, habilitados o revaluados (por haberse efectuado ampliaciones o nuevas construcciones) desde el 1º de enero de 1952.

Tal régimen diferencial ha de tener, por su propia naturaleza, una vigencia limitada y, por consiguiente, corresponderá que en oportunidad de practicarse la revaluación general prevista en el artículo 32 de la ley, se proceda a la uniformación de las tasas mediante la sanción de la pertinente norma legal.

Por otra parte se incorpora a la ley una disposición que exceptúa por diez años del mayor gravamen que pudiera corresponder a las construcciones efectuadas de conformidad con el régimen estatuido por el decreto 16.465/47 concretando así la previsión contenida en dicho decreto y ratificando el decreto 9.810/54 que dejó en suspenso el cobro del impuesto hasta tanto vuestra honorabilidad se pronunciara al respecto. Una exención similar, pero limitada a la tercera parte de la contribución (parte correspondiente al impuesto territorial) se incluye para las construcciones de análoga naturaleza que se realicen con posterioridad a la vigencia del decreto 16.465/47.

En la misma proporción, y para contribuir al fomento de la construcción de nuevas viviendas, se exime por el término de cinco años a las habilitadas a partir del 1º de enero de 1955, a condición de que sean habitadas por sus dueños y siempre que su valuación fiscal no supere las cifras que fije la reglamentación.

Asimismo y para evitar el aumento de la contribución motivado por la revaluación que conforme a las normas vigentes corresponde practicar en los casos de división de edificios para su venta bajo el régimen de la propiedad horizontal, se prevé que tal hecho no dará lugar a la rectificación del avalúo fiscal vigente, con lo cual los nuevos propietarios pagarán en la proporción correspondiente, el mismo y aun un menor gravamen que el que recaía sobre el inmueble antes de su división.

Finalmente, y consecuente con la política de promover la construcción de viviendas, se ha estimado oportuno elevar la alícuota en vigor para los terrenos baldíos, del 20 ‰ al 30 ‰.

VIII. — Impuesto de sellos

Las modificaciones que por el artículo 11 del proyecto se introducen en la ley de sellos (texto ordenado en 1952) persiguen tres propósitos fundamentales: simplificar el régimen de aquellos gravámenes cuya aplicación en la práctica ha suscitado dificultades y promovido controversias, actualizar y suprimir algunas de las alícuotas diferenciales cuya existencia no responde a razones justificadas y coordinar los procedimientos administrativos y judiciales que se siguen en materia de sellos con los que rigen para los demás tributos a cargo de la Dirección General Impositiva.

Dentro del primer grupo, merece destacarse la solución dada al problema de la jurisdicción en el caso de operaciones sujetas al impuesto realizadas en pro-

vincias con bancos oficiales nacionales, al que ha planteado la aplicación del tributo a los créditos en descubierto y a los depósitos, y al relativo a las operaciones de movimientos de fondos con el exterior.

En cuanto al primer aspecto, siendo incontestable que el carácter de establecimientos nacionales que revisten los bancos oficiales no altera la jurisdicción de las provincias para gravar con el impuesto local de sellos los actos que aquéllos celebran en sus territorios, en concordancia con lo dispuesto en la resolución 56/52 dictada por el Ministerio de Hacienda como consecuencia de una ponencia de la Sexta Conferencia de Ministros de Hacienda, se modifica el inciso b) del artículo 2º de la ley, en el sentido de que ésta sólo debe aplicarse cuando los actos concertados en provincias con establecimientos bancarios nacionales deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción federal, quedando los demás sujetos exclusivamente a sellado provincial.

En lo que se refiere al sistema de imposición vigente en materia de créditos y depósitos, los problemas que ha traído su aplicación han sido más complejos aún. En efecto, ya en la doctrina, la cuestión de distinguir el depósito irregular del mutuo es de las más intrincadas, toda vez que estas figuras, en ciertos y determinados aspectos, presentan similitudes tales que hacen difícil su diferenciación.

Aunque la mayoría de los autores se inclina a opinar que a tal efecto debe atenderse primordialmente a la intención de las partes, teniendo en cuenta en interés de cuál de ellas se celebra el contrato, no debe olvidarse que este criterio no puede aplicarse en forma absoluta, por cuanto existen otras características y circunstancias que deben ponderarse al resolver los casos concretos. Si a lo expuesto se agrega el hecho de que en la ley en vigor los depósitos satisfacen un impuesto muy inferior al que recae sobre las operaciones de crédito, se explica el porqué de las frecuentes controversias administrativas y judiciales entre el fisco y los contribuyentes sobre la materia.

A obviar las dificultades reseñadas, haciendo la aplicación del gravamen clara y sencilla, tiende el cambio de régimen propuesto que establece una tasa única (calculada de modo tal que su producido equivalga al de las actuales) sobre todas las operaciones monetarias que devengan interés.

En el nuevo régimen proyectado se ha tenido buen cuidado de eximir del impuesto a los documentos en que se instrumenten fianzas o garantías de operaciones gravadas en los capítulos substituídos para evitar dobles imposiciones, como, asimismo, en armonía por los mismos fundamentos tenidos en cuenta para el impuesto a los réditos, se desgrava totalmente de sellos a los depósitos bancarios en caja de ahorro, incluídos los que se realicen en las cuentas de participación en valores mobiliarios del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias.

Como es notorio, las dificultades de interpretación que han suscitado las normas en vigor acerca de las operaciones de movimiento de fondos con el exterior regladas por el capítulo VI del título II de la ley, han dado lugar al sostenimiento de diversos criterios, tanto en el orden administrativo como en el judicial, y, desde luego, por parte de los contribuyentes.

Con el objeto de evitar los inconvenientes apuntados se propicia la implantación de un régimen que define en forma clara la materia imponible, circuns-

cribiéndola, en principio, a las operaciones que se realizan con intervención del Banco Central de la República Argentina y de las instituciones autorizadas por éste para operar en cambios, sin perjuicio de que en la reglamentación se precisen detalladamente las operaciones sujetas a este gravamen.

Dentro del segundo grupo de reformas, cabe hacer referencia al aumento del 3 % al 4 % del impuesto que grava las operaciones de cambio, ya que no se justifica la aplicación a tales actos de una tasa menor que la que rige para la generalidad de los sujetos al tributo de que se trata; a la supresión del tratamiento preferencial de que gozan las operaciones de compraventa de mercaderías registradas en bolsas y mercados, por no constituir transacciones propias de dichas entidades y hallarse gravadas, cuando se efectúan fuera de dichas instituciones, con la tasa general del 4 %; y a la actualización y equiparación del sellado a los recibos y giros internos.

Con respecto a estos últimos, es dable destacar que el proyecto elimina del campo de imposición a los procedimientos de contabilidad que implican transferencia de fondos, de forma tal que en lo sucesivo sólo sufragarán el impuesto las operaciones instrumentadas mediante el respectivo documento.

En cuanto al tercer grupo de modificaciones —coordinación de los procedimientos administrativos y judiciales— corresponde destacar que se suprime el recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda, de resoluciones dictadas por la Dirección General Impositiva, acordando, en cambio, los recursos de reconsideración y repetición ante la repartición nombrada que autoriza la ley 11.683. sin perjuicio, desde luego, del derecho de los contribuyentes a recurrir a la justicia en los casos y en la forma que determina el texto legal citado.

También se extienden al impuesto de sellos las disposiciones de la ley 11.683 en materia de prórrogas y prescripción, tanto en lo que se refiere a los plazos y a la forma de contarlos, como en lo que atañe a las causas de suspensión e interrupción de las prescripciones.

Cabe agregar que el artículo considerado incluye una exención de carácter general —cuya conveniencia es innecesario destacar— a los contratos y operaciones motivados por convenios suscritos entre el gobierno nacional y gobiernos extranjeros, siempre que exista reciprocidad. La falta de una norma como ésta en la ley vigente, obligó a dictar los decretos a que se refiere el artículo 12 del proyecto adjunto.

IX. — Derechos de inspección de sociedades anónimas

En lo relativo a los derechos de inspección de sociedades anónimas, la reforma introducida por el artículo 13 del proyecto sometido a consideración de vuestra honorabilidad tiende a actualizarlos, dado que datan de enero del año 1932, y al mismo tiempo a graduarlos en función del capital de las empresas, consultando así la diversa capacidad contributiva de las mismas. También se agrega una norma para suplir una omisión de la ley actual que no prevé sanción alguna por la mora en el pago y se suprimen las disposiciones que establecen la forma y el destino de los ingresos en concepto de derechos, que ya están

Las consideraciones formuladas precedentemente evidencian, como se ha señalado al comienzo de este mensaje, que las reformas impositivas contenidas en el proyecto adjunto responden a un plan armónico que concilia la justa redistribución de la carga tributaria con los intereses de la economía nacional y las necesidades financieras del Estado, a la vez que implican un ponderable mejoramiento de la técnica de aplicación de los gravámenes, razones por las cuales este Poder Ejecutivo no duda de que merecerá la aprobación de vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

Pedro J. Bonanni.

Sr. Presidente. — En consideración.

Sr. Durand. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Durand. — El despacho que acaba de enunciarse se refiere a un proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y que la Honorable Cámara de Diputados le ha prestado aprobación, viniendo luego en revisión a este Senado. Se trata de una reforma, con carácter general, a casi todo el sistema impositivo, similar a la que en otras ocasiones hemos considerado en este recinto.

Días pasados, en circunstancias de informar una de las últimas reformas tributarias, expresé que era condición de buen gobierno ir adecuando la legislación general, y la impositiva en particular, a los distintos cambios que pudieran operarse en el medio social y económico de la colectividad. Esta reforma es un claro ejemplo que refuerza el valor de los conceptos sostenidos y que me complace en señalar, porque coincide también con la opinión que sustenta el Poder Ejecutivo, al afirmar en el mensaje que acompañó a este proyecto, que esta iniciativa es una etapa más en la adecuación de nuestro régimen rentístico a la orientación justicialista dada al país en el orden económico-financiero a partir del año 1946.

Este Congreso Nacional, producto de la revolución peronista, es testigo de la evolución operada. Pero hay más, todavía, que estimo conveniente destacar: es la concreción de un afán que nuestro líder, el general Perón, no ha dejado de exteriorizar en cuanta oportunidad se le ha presentado. Para él, el Estado moderno no resiste la acción demoledora de los hechos económicos, sociales y políticos, sin reorganizar su propia defensa, comprendiendo que es una doctrina en acción. Y esa doctrina ya la ha dado a su pueblo. La Doctrina Nacional establece que la acción económica en materia impositiva tenderá a lograr una equitativa distribución de las cargas fiscales en relación con la capacidad contributiva de la población y a utilizar el impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la justicia social y de la economía social del país.

La modificación al sistema impositivo que hemos considerado con anterioridad y las que tratamos en estos momentos, vienen encauzándose en la línea que le marcan los objetivos del Plan de Gobierno, y reconocen como fuente de inspiración los postulados de la Doctrina Nacional.

El proyecto de ley incluido en el despacho que estoy informando contiene modificaciones a varios impuestos. Trataré a continuación de explicar cada una, refiriéndome a ellas por separado.

El artículo 19 se refiere a las modificaciones a introducirse a la ley 11.683, texto ordenado en 1952, que trata del procedimiento para la aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva.

El primer apartado dispone la substitución del artículo 42 de la ley. Este artículo fija los recargos que se establecen cuando ocurra falta de pago al vencimiento de los impuestos, anticipos e ingresos a cuenta. Lo que se modifica es la escala de recargos, manteniendo los montos actuales hasta el 20 por ciento, pero, como puede verse en el texto, se agregan recargos escalonados hasta retardos de más de cinco años. La razón de esta mayor severidad obedece a que, por la frecuencia con que se incurre en infracción, no obstante las franquicias que acuerda la ley para estos casos, hace suponer que el recargo no alcanza a llenar la finalidad que se le ha atribuido, por su lenidad. No puede negarse la necesidad que tiene el fisco de recaudar sus tributos en fechas fijas, puesto que con su producido cubre los gastos de los servicios que presta. Si el contribuyente no cumple en su oportunidad se producen desequilibrios entre las recaudaciones y los gastos que redundan en perjuicio de la comunidad. De allí que al aumentar los recargos por retardos en el pago se persiga intimidar al contribuyente y resarcir los perjuicios que la mora produce al fisco.

El artículo 51 trata de la aplicación de las multas previstas en los artículos 43, 44 y 45. El párrafo que se agrega no necesita mayor explicación, pues dado el carácter penal de las multas mencionadas, se justifica que esas sanciones no se apliquen cuando ocurra el fallecimiento del infractor.

La modificación que se propicia al artículo 53 tiende a corregir una anomalía en la aplicación del mismo. Este artículo fija en 5 años la prescripción de las acciones y poderes del fisco para exigir el pago de los impuestos y aplicar las multas, y en dos años la prescripción en materia de repetición. Esta dualidad en la materia ha traído algunos inconvenientes y confusiones en la resolución de determinados casos. Con la unificación de los términos se da una solución práctica y equitativa.

Las otras dos modificaciones que se proyectan a esta ley tienen por finalidad mejorar la técnica de aplicación de los tributos y agilizar sus tramitaciones, por cuyo motivo no abundaré en mayores explicaciones.

El artículo 2º del proyecto trata de las modificaciones a introducirse a la ley 11.682, texto ordenado en 1952, de impuesto a los réditos. El artículo 19 de la ley de réditos determina quiénes no están sujetos al gravamen. Aquí se substituyen tres incisos y se agrega uno. El inciso d) se modifica de manera tal para que dentro del mismo queden exentas del pago del impuesto todas las utilidades, de cualquier naturaleza que sean, que distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios.

Considero conveniente dejar debidamente aclarado que la exención comprende a las cooperativas de consumo, como también a todo otro tipo de cooperativa que en su estatuto social tenga fijado como objetivo la sección consumo; en este caso, lógicamente, la franquicia se aplicará únicamente a la parte relativa a esta sección. En razón de la exención que se hace al sujeto —en este caso la cooperativa—, y a fin de evitar desnaturalizaciones, se entiende por cooperativa de consumo o sección consumo, la que tiene por objeto adquirir por cuenta de la sociedad y distribuir entre los socios artículos de consumo, de uso personal y del hogar, es decir, que la exención comprendería la provisión de comestibles, alimentos en general, ropa, calzado, etcétera, y toda clase de artefactos para uso y comodidad de la familia y del hogar.

Por el inciso h), actualmente se eximen del pago del impuesto los intereses de los depósitos en Caja de Ahorro que no excedan en conjunto de 50 pesos por año fiscal y por persona. Mediante la modificación se desgrava, con carácter amplio y sin ninguna restricción por condición ni límite alguno, a estos réditos, toda la mencionada amplitud involucra en la norma a los intereses de los depósitos que se realicen en el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, institución ésta que ha tenido singular aceptación entre el sector de ahorristas más modesto de la población.

El inciso j) exime del gravamen a los derechos amparados por la ley de propiedad intelectual en la parte que no exceda de pesos 6.000 por año fiscal; por la modificación se eleva el monto eximido a la suma de pesos 20.000, concretando previsiones del segundo Plan Quinquenal sobre estímulo de las actividades culturales.

A este artículo 19 se le agrega un inciso, el n), según el cual quedará exenta de impuesto la diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los casos de seguro de vida y mixtos, y en los de títulos o bonos de capitalización; esta exención persigue el propósito de fomentar el seguro. Quiero agregar aquí que estos conceptos se

encuentran actualmente gravados en la segunda categoría por el artículo 45, inciso e), pero advierto que según este proyecto de ley se propone la supresión de esta última disposición en el mencionado artículo, concordando así las dos cláusulas que de jo señaladas.

Se modifican los artículos 20 y 21 de la ley, que se refieren a los mínimos no imponibles de las cuatro categorías y a los importes deducibles por cargas de familia. Esta modificación viene a cumplimentar una de las más caras aspiraciones justicialistas de la Doctrina Nacional, y favorecerá a un crecido número de contribuyentes.

El artículo 20 de la ley autoriza a las personas de existencia visible residentes en la República a deducir de sus réditos, en concepto de renta no imponible, una cierta cantidad que varía según que el contribuyente obtenga réditos pertenecientes a las distintas categorías. La deducción actualmente permitida es de pesos 3.600 para los de la primera y segunda categoría y de pesos 6.000 para los de la tercera y cuarta categoría.

La modificación eleva uniformemente a pesos 7.200 el mínimo no imponible para las cuatro categorías, es decir, que para los de la primera y segunda significa aumentar en pesos 3.600 el mínimo no imponible y para los de la tercera y cuarta, en pesos 1.200. Esta medida reconoce como fundamento el propio carácter de la deducción, ya que, constituyendo este mínimo no imponible, teóricamente, la suma que el contribuyente necesita para vivir, lo lógico y justo es que sea igual en todos los casos o categorías, cualesquiera fueren sus medios de subsistencia o la fuente de ingresos. Cuando estos contribuyentes tengan cargas de familia, el artículo permite aumentar los mínimos no imponibles en la suma de pesos 1.500; esta cantidad se eleva, en la modificación, a la suma de pesos 2.400. Además, el mismo artículo dispone que cuando el contribuyente obtenga rentas del trabajo personal, tendrá derecho a una deducción adicional igual a la diferencia entre pesos 6.000 y pesos 12.600; en la modificación que comento se eleva el tope de pesos 12.600 a pesos 15.000.

Con respecto al artículo 21 de la ley, que trata de las deducciones por carga de familia, diré que son importantes las modificaciones. Así, en principio, el límite de renta que puedan tener las personas a cargo del contribuyente para ser considerada «cargas de familia», se halla fijado en pesos 2.400; este límite se eleva a pesos 3.600 anuales. Los importes deducibles en concepto de cargas de familia se modifican en la siguiente forma: por cónyuge, de pesos 1.500 a pesos 2.400; por hijos y otras cargas, de pesos 1.200 a 1.800 pesos.

Para poder tener una idea del beneficio que estas modificaciones reportarán para los contri-

buyentes con «familia tipo», es decir, casados con dos personas a su cargo, es ilustrativo el cuadro que figura en el mensaje del Poder Ejecutivo que tenemos a la vista. En él puede apreciarse una diferencia en favor del núcleo familiar, con respecto a las deducciones actuales, de pesos 6.600 para los contribuyentes de la primera y segunda categoría, de pesos 4.200 para los de tercera y de pesos 6.600 para los de cuarta.

Para no alejarme del tema que estoy tratando, voy a comentar las modificaciones al artículo 87 de la ley de impuesto a los réditos, que trata de la tasa básica y la tasa adicional progresiva, a aplicarse sobre los réditos netos sujetos a impuesto. La reestructuración de la escala de la tasa adicional tiene por finalidad atenuar la carga tributaria que gravita sobre las rentas pequeñas y medianas. Según se ve, empezará a aplicarse a partir de los réditos netos imponibles que superen los pesos 10.000 anuales, en vez de hacerlo a partir de los pesos 5.000 actuales. Esta modificación no afecta el máximo actual de la tasa que es del 33 por ciento, así como que la tasa promedio ha de mantenerse por debajo de la que se halla en vigor hasta una renta neta de pesos 80.000; a partir de este nivel la escala aumenta en forma leve con incidencia sobre las mayores rentas, tal como se explica detalladamente en el mensaje del Poder Ejecutivo. Si consideramos aquí también el caso de la «familia tipo» con réditos netos de hasta pesos 150.000 anuales, conforme a la modificación, deberá oblar tributos menores que en la actualidad.

Retomando el orden de las modificaciones, correspondería considerar la que se consigna en el artículo 45, pero recuerdo que hace un momento, al comentar la modificación del artículo 19, di las explicaciones de la razón de ser de estas.

El artículo 49 de la ley define cuáles son los réditos de tercera categoría. La modificación que se propicia tiende a excluir de esta categoría a los corredores y despachantes de aduana, llevándolos a la cuarta categoría debido a que en la formación del rédito interviene de manera preponderante el trabajo personal. El justo traspaso de estos contribuyentes de una categoría a otra no sólo los favorecerá con las franquicias que se acuerdan a los de la cuarta, sino que también al incluirse dentro de esta categoría automáticamente quedarán liberados de las cargas a que estaban obligados por el impuesto a los beneficios extraordinarios.

El tratamiento que la ley que nos ocupa acuerda a las sociedades de capital es también objeto de modificación. En efecto, el gravamen que recae sobre ellas es unificado, suprimiéndose la distinta forma de pago del mismo según se trate de entidades constituídas en el país o en el ex-

tranjero, ya que el sistema en vigor con respecto a las primeras resulta complicado y molesto tanto para el fisco como para la entidad contribuyente, al mismo tiempo que configura un tratamiento desigual fundado únicamente en la estructura jurídica adoptada para su organización por la sociedad.

Efectivamente, según el sistema actual, cuando se trata de únicos propietarios o sociedades de personas, los beneficios se gravan con la totalidad del impuesto en el ejercicio en que ellos se obtienen; contrariamente, en el caso de sociedades de capital, una parte del impuesto, el 24 por ciento, se ingresa cuando se obtiene la utilidad, y el resto, es decir, el 6 por ciento, cuando se la distribuye. Por el proyecto, la tasa queda unificada en el 30 por ciento, modificándose en consecuencia los artículos 56 y 58, y derogándose el inciso b) del artículo 45 y el artículo 59 de la ley, lo que significa un concepto racionalizado de la aplicación del tributo en este aspecto.

Y me voy a referir a las modificaciones que se proyectan al artículo 72 de la ley, asunto profusamente comentado por los técnicos en la materia y por las publicaciones especializadas, y que debido a la importancia que reviste para las empresas, especialmente industriales, es lógico atribuirle singular trascendencia en el adelanto y desarrollo económico de la Nación. A este respecto, cabe recordar que por ley 14.060 se facultó al Poder Ejecutivo para admitir las amortizaciones extraordinarias en el balance impositivo del impuesto a los réditos, sobre rubros del activo fijo con fines de reposición del equipo industrial y con el objeto de ajustar el mencionado balance a la realidad económica, tendiendo a que el mismo expresara los beneficios reales de la empresa y no valores teóricos o nominales.

La medida se fundó —y así se expresó al sancionarse— en que el constante aumento de los precios del utilaje industrial, fenómeno actual y de alcance mundial, repercutía en mayor o menor medida sobre las diversas actividades productivas y podía conducir, de no adoptarse medidas adecuadas, a una descapitalización progresiva de las empresas, que, obligadas a destinar a la formación de fondos de reposición del activo productor sumas fijas y referidas al costo histórico, se encontraban, al cabo del término de la vida útil de los bienes, con que los elementos que iban a reemplazar tenían un precio muy superior al previsto con ese fin; ello con el agravante de que la diferencia entre el monto necesario para el reemplazo y la previsión constituida por imperio de la ley fiscal había engrosado sus utilidades sujetas a impuesto, con lo que el tributo venía a agudizar el proceso.

En ejercicio de la facultad que le confiriera

la ley 14.060, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 5.802/52, que determinó los coeficientes de aplicación sobre las amortizaciones ordinarias para calcular las extraordinarias, en función de los ejercicios en que los bienes fueron adquiridos; y estableció que las amortizaciones extraordinarias no tendrían incidencia alguna para el cálculo del capital y de la utilidad gravada con el impuesto a los beneficios extraordinarios.

Iguales razones que las que motivaron la implantación del sistema aconsejan ahora revertirlo en varios de sus aspectos. Así, en cuanto a los montos de los coeficientes admitidos, se estima prudente incrementarlos en un 75 por ciento más o menos, con respecto a los fijados por el decreto precitado; en lo relativo a las adquisiciones susceptibles de beneficiarse con dichas amortizaciones, se considera necesario incluir las efectuadas en los ejercicios 1951, 1952 y 1953, fijando para el primero un coeficiente del 40 por ciento y para los dos restantes uno del 10 por ciento. Además, se ha creído conveniente aplicar el sistema al impuesto a los beneficios extraordinarios.

Esta última medida se explica en razón de la estrecha vinculación entre el impuesto a los réditos y el mencionado, proponiéndose, en consecuencia, que corresponde admitir la deducción de las amortizaciones extraordinarias también en el gravamen a los beneficios extraordinarios, procedimiento que, como se dice en el mensaje, «al mismo tiempo que significará una apreciable mejora en la técnica de aplicación de los tributos, permitirá simplificar la liquidación del impuesto a los beneficios extraordinarios, ya que el cómputo en éste de las amortizaciones extraordinarias reemplazará la actual deducción de un importe adicional equivalente al monto de las amortizaciones ordinarias».

Al artículo 75 de la ley se le proyecta un agregado con el objeto de solucionar un problema que afecta a determinados funcionarios judiciales. En la actualidad, este artículo dispone que los ministros de la Corte Suprema, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones y jueces, tributarán el impuesto, salvo su manifestación expresa en contrario. El agregado no hace más que extender a los funcionarios judiciales que perciban sueldo superior al de los jueces, el tratamiento que el artículo acuerda a estos últimos.

Por el artículo 3º del proyecto de ley que consideramos, se deroga una disposición del decreto 14.535 de 1944, ratificado por ley 12.291. Este decreto, en su artículo 49, inciso e), prescribe que no están sujetos al pago de ningún impuesto nacional, provincial o municipal, los beneficiarios otorgados por la Caja Nacional de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios de Perodistas. La derogación obedece a que no es acon-

sejable mantener un tratamiento de privilegio para un sector de jubilados.

El artículo 4º del proyecto de ley incluido en el despacho de la comisión, introduce modificaciones a la ley de impuesto a los beneficios extraordinarios, texto ordenado en 1952.

En primer término, se substituye el último párrafo del artículo 1º de la ley.

Esta substitución importa elevar el beneficio no imponible de pesos 20.000 a pesos 30.000, medida en concordancia con la desgravación que se propone al sistema tributario.

La modificación que se proyecta al inciso c) del artículo 3º de la ley tiene por finalidad relacionar a las variaciones económicofinancieras y a las que se produzcan en la tasa promedio del impuesto a los réditos, las deducciones en concepto de sueldos de dueños o socios. Para que esta adecuación sea fiel expresión de la situación, nada más lógico que dejar este procedimiento en manos del poder que lo reglamenta. Igual caso sucede con la modificación que se propicia al inciso f).

Con respecto a la derogación del inciso e), ya al comentar las modificaciones a la ley de impuesto a los réditos he explicado el motivo de la misma.

Y en cuanto a la modificación del artículo 5º de la ley, diré solamente que persigue implantar para este tributo el sistema que rige para los impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales en lo relativo al período de 4 años, dentro del cual pueden compensarse los quebrantos de ejercicios anteriores.

Como puede verse, en las modificaciones propuestas a la ley que estoy comentando, ha privado un criterio de actualizarla y concordarla con el resto de la legislación impositiva.

Y entro, señor presidente, a referirme a las modificaciones que se propician a la ley del impuesto a las ganancias eventuales, texto ordenado en 1952.

El inciso e) del artículo 4º de la ley se refiere a la exención para los beneficios provenientes de la venta de bienes de uso personal, fijando el monto exento en la cantidad de diez mil pesos. En la modificación se eleva este monto hasta la cantidad de treinta mil pesos y se incluye, entre los bienes, a los automóviles.

El artículo 5º de la ley se substituye íntegramente, y en el mismo se introducen modificaciones tendientes a alivianar la carga tributaria que he de explicar. Para el caso de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se establece que se computará como costo el valor fijado para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la valuación fiscal al 1º de enero de 1946 o el costo real, según cual fuere el mayor, en vez de considerarse el costo que tuvo el bien en manos del causante, como se halla establecido ahora. En los casos de ven-

ta de inmuebles y automotores, se beneficia al contribuyente, acordándose una deducción adicional que consiste en la incrementación del costo de los bienes transferidos en un 5 por ciento desde su adquisición o construcción hasta 1945, y en un 10 por ciento desde 1946 hasta 1953 inclusive. El resto del artículo permitirá ir adecuando sus disposiciones a la fluctuación circunstancial de la plaza, propendiendo así a graduar este tributo en beneficio del contribuyente.

El agregado que se hace al artículo 6º de la ley tiene por finalidad reprimir los actos de evasión de este impuesto y resarcir al fisco por el perjuicio que tales maniobras le producen.

En el artículo que se propone agregar se establece que en el caso de emisión de acciones con prima, el beneficio imponible estará dado por la diferencia entre el valor de colocación del título y el que le sea atribuible en función del capital de la empresa, ajustado conforme a las normas que rigen el impuesto a los beneficios extraordinarios.

El artículo 6º del proyecto de ley que consideramos contiene modificaciones a la ley de impuesto a las ventas número 12.143, texto ordenado en 1952.

En cuanto a la tasa del impuesto, se da una nueva y más sencilla estructura a las disposiciones sobre la misma, refundiéndolas en el artículo 10 y derogando, en consecuencia, el artículo 12. La tasa se mantiene en el 8 por ciento actual. Para el caso de las ventas de petróleo crudo y sus derivados, la misma queda en su actual monto del 1,25 por ciento.

En materia de exenciones, de que trata el artículo 11 de la ley, se libera a las ventas de bloques premoldeados de hormigón, miel de abeja, productos de las explotaciones mineras y aceites comestibles, siendo del caso señalar que para estas dos últimas ya se había dispuesto por el decreto 11.894, de 1954, la suspensión de la aplicación del impuesto, en uso de facultades que la ley confiere al Poder Ejecutivo, suspensión que por el proyecto se convierte en definitiva. Además, se substituye la expresión «frutos del país» por la enumeración de los productos comprendidos en la misma; se deroga el inciso b) en virtud de incluirse los productos a que el mismo se refiere en el inciso a); se limita la exención a favor de las ventas de que trata el inciso d) a las compras efectuadas por las cooperativas de consumo, de acuerdo con el criterio que el proyecto aplica ya en materia de exenciones en el ámbito del impuesto a los réditos, al cual ya hice referencia; se amplía a la venta de toda clase de libros la exención actual, que sólo favorece a la de libros de texto; se suprimen las condiciones que limitan la desgravación que favorece al suministro de servicios públicos como el gas, la electricidad y similares, y, finalmente, se extiende al papel desti-

nado a la impresión de libros la exención que hoy favorece sólo al utilizado en la de diarios, periódicos y revistas. De esta manera, la legislación en la materia se equipara con la de los países americanos y europeos, contribuyendo a producir libros a más bajo costo y más accesibles al pueblo, y estimulando la actividad editorial.

El artículo 79 del proyecto de ley modifica distintas disposiciones de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1952. La primera de ellas, derogación del artículo 21, tiene por finalidad evitar a las empresas de transporte y a la dirección una tarea como es la de informar semanalmente el movimiento de las mercaderías sujetas a impuestos que circulan, que es sumamente engorrosa y pesada con relación a los resultados que reporta.

El artículo 31 de la ley se modifica elevándose del 65 por ciento al 75 por ciento la alícuota máxima del impuesto a los cigarrillos que se aplica sobre el precio de venta al público, con la finalidad de permitir una compensación de los mayores costos de producción, debidos a las mejoras llevadas a cabo últimamente en los sueldos y jornales del personal, fijados por los convenios recientemente suscritos. Esta misma razón ha mediado para propiciar la modificación del artículo 35 de la ley, autorizándose a aumentar hasta el máximo de 32 centavos por gramo el impuesto a los cigarros y cigarrillos, y hasta 60 pesos por kilogramo el que recae sobre los tabacos.

La modificación al artículo 40 de la ley configura una medida de honda repercusión económica para las zonas productoras de tabaco. En la actualidad el despalillado del tabaco sólo se permite en el lugar de elaboración. Mediante el sistema que se implanta, esta primera etapa de la elaboración podrá llevarse a cabo en las zonas donde se produce. De esta manera se crearán nuevas fuentes de trabajo en los lugares de cultivo, se obtendrá una sensible disminución del costo de producción al no gravitar sobre el mismo los gastos de flete de esta clase de residuos y una menor utilización de vagones para esta carga. Además reportará una disminución del consumo de energía eléctrica en los centros urbanos al no tener que realizar en ellos las operaciones de despalillado y un mayor rendimiento de la parte utilizable de las hojas de tabaco, pues el desperdicio será menor al efectuarse la operación con las hojas que aun no se han secado.

La modificación del impuesto a los alcoholes consiste en gravar con la tasa de pesos 0,115 por litro y por grado (equivalente a la tasa de pesos 0,03 y sobretasa de pesos 0,085 actuales) a la salida de fábrica, aduana o depósito fiscal, a todo alcohol que no se inutilice para el consumo de boca, quedando gravada con impuesto de pe-

sos 0,03 por litro y por grado, o totalmente liberados de gravamen los alcoholes desnaturalizados, según sea su destino (artículo 41); y tiende a los propósitos que claramente se expresan en el mensaje, es decir, a evitar el desvío de los alcoholes puros de sus usos específicos, al mejoramiento de la liquidación del gravamen, concentrándola en la fuente de producción, así como a facilitar una más adecuada fiscalización, sin que por ello se aumente el costo del producto que las industrias utilizan como materia prima.

El nuevo sistema obliga a modificar el régimen vigente para los vinagres y vinos importados con más de 13º de alcohol en volumen, a efectos de que tributen un impuesto interno igual al que pagan esos productos cuando son de fabricación nacional (artículo 45, párrafos nuevos), y hace necesario modificar también la tasa que como bebida alcohólica tributan los vinos compuestos, vermut, quinados y similares, ya que de acuerdo con las disposiciones legales en vigor la reforma significaría una rebaja notoria del gravamen que tributan actualmente [artículo 64, inciso a)].

Con respecto a los seguros se declaran liberados de abonar la diferencia de gravamen los reaseguros que las compañías argentinas realicen en el exterior en el caso de operaciones no aceptadas por el Instituto Nacional de Reaseguros (artículo 74, párrafo nuevo), y se dispone que los seguros contratados en el exterior tributarán en concepto de impuesto interno una suma igual a la que por sellado pagan los contratados en la República (artículo 75, inciso b), con el fin de adecuar los textos de estos artículos a las disposiciones correlativas de la ley 12.988 y de la ley de sellos, respectivamente.

En lo que respecta al impuesto a las cervezas, se autoriza a deducir del precio de venta (sobre el cual se liquida el gravamen) el precio de los envases entregados en comodato. Este procedimiento se propicia a fin de adecuar el gravamen a las modalidades propias del comercio aludido, por cuanto las empresas productoras se reservan el derecho de propiedad de los envases, efectuándose la transacción únicamente en lo que se refiere al producto en sí (artículo 96, último párrafo).

En materia de impuesto a los artículos suntuarios, se limita la aplicación del gravamen a aquellos artículos que por la materia que los constituyen tienen carácter de lujo. Es así como sólo se proyecta gravar los artículos confeccionados con piedras y metales preciosos o semipreciosos u otras materias similares, o pieles de peletería, y se declara exentos del gravamen a aquellos artículos que aun en el caso de estar confeccionados con dichos materiales no tienen carácter de suntuarios en razón del uso a que se los destina, ni a los que tienen agregados dichos materiales en forma de baño, file-

teado, virola, guarda, etcétera (artículos 110 y 111).

La modificación del impuesto a los neumáticos consiste en eximir del gravamen a los utilizados en motonetas, bicicletas, triciclos y juguetes, en razón de que se estima que el mismo debe incidir exclusivamente sobre aquellos empleados por vehículos de transporte de carga o pasajeros (artículo 112).

La modificación que se propicia por el artículo 8º del proyecto de ley, tiene por finalidad establecer un gravamen fijo para los hidromeles con 10 o más grados de alcohol en volumen, a efectos de equipararlos a los vinos y sidras, a los cuales se asemejan, por cuanto, de acuerdo con las disposiciones legales en vigor, dichos productos pagan actualmente el impuesto como bebida alcohólica (ley 14.273, artículo 6º inciso 3º).

Por el artículo 9º del proyecto se arbitra una serie de medidas que importan rebajas de cierta consideración en materia del impuesto de contribución inmobiliaria y que concuerdan con las tomadas en otras esferas con el fin de fomentar la construcción de viviendas y atenuar las repercusiones del alza del costo de las construcciones y de los valores inmobiliarios.

Se modifica el artículo 21 de la ley en el sentido de rebajar en 6 puntos la tasa de la contribución inmobiliaria a pagar por las construcciones habilitadas o que hayan sido objeto de revaluación con posterioridad al 1º de enero de 1952, y se actualizan los límites de valuación dentro de los que corresponde la aplicación de las distintas tasas. Esta reforma complementa el sistema de la ley 14.273, en cuanto ésta autorizó al Poder Ejecutivo para postergar la revaluación de inmuebles que debía realizarse en el año 1953, arbitrio al que se acudió para evitar los efectos que en la economía de los propietarios iba a producir el aumento del gravamen.

Se eleva la alícuota actual para los terrenos baldíos del 20 por mil al 30 por mil, en concordancia con la política de promover la construcción de viviendas (artículo 21, inciso 3º).

Se exime del pago de la contribución que nos ocupa, por el término de diez años a contar desde su habilitación, a las ampliaciones realizadas bajo el régimen del decreto 16.465, de 1947, concretando la previsión contenida en este mismo decreto y ratificando el 9.810, de 1950, que dejara en suspenso el cobro de dicho gravamen hasta tanto se pronunciara el Congreso. Además, se libera de un tercio del mayor gravamen aplicable en concepto de impuesto territorial a las ampliaciones que se realicen con posterioridad a la vigencia del referido decreto 16.465, de 1947, que reúnan las condiciones que determine la reglamentación (artículo 24,

La exención de que gozan los inmuebles de propiedad de la Nación, de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se limita a aquéllos ocupados por dependencias que ejerzan funciones de Estado como poder público [artículo 25, inciso a)].

Se limita la exención que favorece a las sociedades cooperativas, a las de consumo, de acuerdo con el criterio ya expuesto al tratar los impuestos a los réditos y a las ventas, simplificándose, de paso, la redacción de la norma respectiva [artículo 25, inciso e)].

El sistema en vigor para determinar cuándo corresponde la exención a los inmuebles en que funcionen escuelas particulares, que resulta excesivamente complejo, se substituye por otro en función del número de alumnos a los cuales se imparte enseñanza gratuita [artículo 25, inciso f)].

Las nuevas viviendas, incluidas las vendidas bajo los regímenes de propiedad horizontal o colectiva, cuya valuación no exceda la cifra que establezca la reglamentación, son eximidas por el término de cinco años de un tercio de la contribución de que se trata, en la parte correspondiente al impuesto territorial, siempre que dichos inmuebles sean habitados por sus dueños. Se tiende así a fomentar la construcción de nuevas viviendas (artículo 26, párrafos nuevos).

Se agrega al artículo 35 de la ley una norma por la cual las unidades de vivienda resultantes de la división de edificios por el régimen de la propiedad horizontal abonarán en lo sucesivo, proporcionalmente, igual o menor impuesto que el que satisfacía el inmueble antes de su división, ya que esta circunstancia no dará lugar a la revaluación de la propiedad. Este tratamiento favorable se hace extensivo, a partir del 1º de enero de 1955, a los edificios vendidos antes de esa fecha, mediante una cláusula agregada a dicho artículo, por lo que se dejan sin efecto las revaluaciones ya practicadas. Se tiende así a evitar el aumento del gravamen con motivo de la revaluación, que conforme con las disposiciones en vigor debe practicarse en dichos casos de división.

El plazo de dos años que actualmente acuerda la ley para reclamar el pago o la devolución de las diferencias de contribución resultantes de modificaciones introducidas a las propiedades, se amplía por el proyecto a cinco años, que comenzarán a computarse a partir del 1º de enero del año siguiente al de la fecha de la denuncia o de la notificación de la nueva valuación (artículo 36, segundo párrafo).

Finalmente, para concluir con la reforma de la ley que nos ocupa, debo señalar que el proyecto, al establecer que los compradores de tierras fiscales deben registrar sus títulos dentro de los dos meses de la fecha de su otorgamiento, y no de la compra del bien, corrige una deficiencia de la norma actual (artículo 46, primer párrafo).

El artículo 10 del proyecto que estamos considerando introduce dos modificaciones a la ley 13.264, de expropiaciones.

La primera, al artículo 14, consiste en ampliar de 30 a 90 días el plazo dentro del cual debe expedirse el Tribunal de Tasaciones, y tiene por finalidad la de facilitar el desenvolvimiento de las tareas de dicho organismo.

La segunda consiste en agregar un párrafo al artículo 19, conforme con el cual el juez deberá comunicar al Tribunal de Tasaciones el auto traslativo de dominio veinte días antes de otorgar la posesión del bien expropiado.

La ley de sellos, texto ordenado de 1952, también es objeto de modificaciones, persiguiendo tres propósitos fundamentales, según lo explica el Poder Ejecutivo en su mensaje.

En primer término, se exceptúan del sellado las operaciones y contratos concertados en territorio provincial con bancos oficiales nacionales situados en el mismo, salvo que esos actos deban cumplimentarse en jurisdicción nacional. En el artículo 3º de la ley se le acuerdan a la Dirección Impositiva facultades para conceder prórrogas, de conformidad con las disposiciones de la ley de procedimientos en materia impositiva, y se le agrega un párrafo al artículo 4º, por el cual se considerará como nueva operación, sujeta al tributo, toda prórroga expresa de un contrato u obligación.

El artículo 14 se modifica en su inciso s), estableciendo que tributarán impuesto proporcional del 4 por mil las fianzas u otras obligaciones accesorias y la constitución de prendas, preceptos que no están incluidos en la ley en vigor.

Al artículo 20 se le introduce una modificación, a fin de que los contratos de valor indeterminado tributen, y se introducen cambios en el procedimiento de manera de simplificar el régimen. La ampliación al artículo 26 tiende a favorecer al contribuyente que necesite ampliar su crédito hipotecario.

Las modificaciones que se introducen al artículo 32 de la ley persiguen dos propósitos: aclarar lo preceptuado en el mismo y elevar discretamente el tributo a pagar en las operaciones que allí se enumeran.

Distintos capítulos de la ley de sellos son objeto de una serie de reformas que tienden a aclarar sus disposiciones y a simplificar el procedimiento de su aplicación. A este respecto es claro y detallado el mensaje del Poder Ejecutivo, por cuya razón no he de abundar en mayores explicaciones a fin de no alargar más este informe. No obstante, he de expresar que la nueva estructuración dada a estos capítulos traerá como consecuencia una más adecuada y racional aplicación de sus disposiciones, una apreciable agilitación de los procedimientos para su tra-

mitación y una equitativa distribución de la carga en razón de la concordancia del tributo a pagar con la magnitud de la operación que motiva.

Como puede observarse por la lectura de su nuevo articulado, en mérito a la claridad de sus disposiciones, habrá de evitarse un crecido número de controversias derivadas de distintas interpretaciones, tanto en el orden administrativo como en el judicial.

Por el artículo 12 del proyecto que consideramos se exime del impuesto de sellos, siempre que medie reciprocidad, a los contratos y operaciones a que se refieren los decretos 11.554 y 13.115 de 1954, por los cuales, respectivamente, y en ausencia de una norma legal que contemplara esos supuestos, se dejó transitoriamente en suspenso, y hasta tanto se pronunciara este Congreso, la exigencia del impuesto en los contratos celebrados entre el IAPI y organismos oficiales de la Unión Soviética, en cumplimiento del convenio comercial argentino-soviético, e igual exigencia respecto de operaciones a realizar por el Banco Central de la República con el Banco de Francia, en observancia de las previsiones contenidas en materia de pagos por el protocolo adicional al convenio comercial y financiero celebrado entre nuestro país y dicha República en el mes de julio de 1947.

También la ley de derechos de inspección de sociedades anónimas, texto ordenado en 1952, es motivo de modificación, según vemos en el artículo 13 del proyecto que consideramos.

El artículo 3º de esta ley fija el derecho anual de inspección que, acotaré, rige desde 1932; la reforma actualiza y adecua estos derechos y los gradúa en función del capital de las empresas. También se establece la sanción a aplicarse en caso de mora, precepto que no figura en la ley en vigor.

La derogación de los artículos 4º y 6º obedece a una razón lógica; las disposiciones contenidas en los mismos ya figuran en la ley de procedimientos en materia impositiva, número 11.683.

Finalmente, por el artículo 14 del proyecto, se aclara el artículo 17 de la ley 14.385, que dispuso la construcción de la red de autopistas y creó gravámenes para su financiación. El procedimiento instituido en este artículo viene a corregir una deficiencia de redacción de la mencionada ley.

Señor presidente: no me explayaré en mayores consideraciones porque estimo que he sido explícito y no quiero abusar de la benévola atención que he requerido a mis honorables colegas. Si algo faltara, podrá suplirlo con ventaja el mensaje que el Poder Ejecutivo acom-

pañó a la iniciativa y que figura como antecedente en el orden del día que tenemos sobre nuestras bancas; para ello presto mi más amplia adhesión a sus juiciosos conceptos y lo hago parte integrante de este informe.

Este proyecto de ley mantiene la línea que se ha trazado el gobierno de la revolución, de ir desgravando los sectores de la población económicamente menos dotados y trasladando la carga fiscal hacia el grupo más capacitado para sobrellevarla, con la finalidad de lograr un sano y justiciero equilibrio, tratando de elevar, con mano equitativa, a los que en la escala económica se hallan en los planos inferiores, buscando además un entendimiento adecuado entre los que tienen y los que no tienen, única manera de evitar el desorden que ocasionan las discrepancias de los unos con los otros, en fin, señor presidente, adecuando este aspecto de la economía estatal a la tercera posición, que en horas memorables creó y ejecutó nuestro ilustre líder, el general Perón.

Este proyecto de ley, así como el nuevo régimen de colonización que hemos considerado en estos últimos días, ha de ser aceptado sin reservas y jubilosamente por todos los obreros y demás trabajadores de esta Nueva Argentina, porque en todo su articulado campea el verdadero concepto de la Doctrina Justicialista en el orden económico, y además porque se utiliza el impuesto como instrumento de gobierno al servicio del bienestar general de la comunidad. Ojalá todos los gobiernos imitaran este juicioso y aleccionador ejemplo.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la

palabra se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente. — **Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.**

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

4

ASUNTO ENTRADO

VI

Comunicación oficial

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar cuenta de un asunto entrado.

Sr. Secretario (Reales). — El Ministerio de Ejército invita a las autoridades del Senado y a las señoras y señores senadores a la ceremonia de la entrega de sables a los nuevos oficiales egresados de los institutos de las fuerzas armadas de la Nación, la que será presidida por el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, y que tendrá lugar el 17 del corriente, a las 10 horas.

Sr. Presidente. — Quedan invitados las señoras y los señores senadores.

No habiendo otro asunto que tratar, queda levantada la sesión.

—Eran las 11 y 10.

ANGEL A. BARNETCHE.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.